

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/9140	14/04/2020	21358
184/9141 a 184/9144	14/04/2020	21361 a 21364
184/9146 y 184/9147	14/04/2020	21368 y 21370

AUTOR/A: NOGUERAS I CAMERO, Míriam (GPlu)

RESPUESTA:

En relación con las cuestiones planteadas, se informa que en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior no se ha producido ningún motín desde hace bastantes años. Han acontecido pequeños conflictos y altercados de mínima significación sin especial alteración de la normal convivencia de los centros penitenciarios donde se han producido, siendo solventados con prontitud gracias a la rápida y muy adecuada intervención del personal penitenciario.

Por otro lado, la realización de las pruebas a que se hace referencia es una competencia de la autoridad sanitaria en cada ámbito competencial autonómico, habiendo sido solicitadas a las mismas por parte de este Ministerio, desde el primer momento.

En cuanto a los criterios seguidos en todo momento para la realización de pruebas han sido los determinados por la autoridad sanitaria competente y, básicamente, como no puede ser de otro modo, siguiendo criterios estrictos de necesidad médica diagnosticada.

Así, cuando algún interno presenta síntomas compatibles con la enfermedad, el profesional sanitario que ha realizado el diagnóstico de sospecha contacta con las autoridades sanitarias comunitarias competentes, comunica el caso a Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, e investiga el vínculo epidemiológico inicialmente, para constatar medidas complementarias que deben llevarse a cabo.

El coordinador sanitario comunitario junto con el responsable sanitario del centro penitenciario, deciden el grado de sospecha que presenta el interno o interna y las medidas que se deben llevar a cabo. Si es preciso, profesionales sanitarios comunitarios



acuden al centro a recoger las muestras para la confirmación del microorganismo. De igual modo, y si fuera necesario, se efectúa el traslado del interno o interna a un centro sanitario extrapenitenciario.

Por otro lado, las medidas adoptadas en todos los centros penitenciarios se están demostrando, por el momento, como elementos de control y contención muy importantes.

En este sentido, el escenario en el que se trabaja está orientado precisamente a la evitación de expansión del COVID-19 mediante

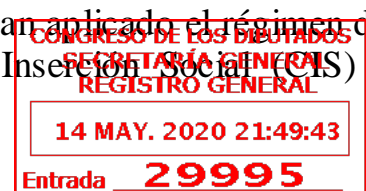
- Intervenciones preventivas.
- Intervenciones sanitarias.
- Intervenciones de minimización del impacto sobre la población reclusa.
- Garantizar el ejercicio de la función pública penitenciaria en los máximos umbrales de seguridad sanitaria para trabajadores e internos.

Como referencia, se detallan las medidas más relevantes adoptadas hasta ahora, estando abiertos a toma de decisiones futuras que se consideren adecuadas, basadas en las ideas a las que se ha aludido en el párrafo anterior.

1. Medidas normativas:

1. 1 Aprobación y publicación de la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, cuyas principales medidas son para todos los establecimientos penitenciarios del Estado:

- Suspensión de todas las comunicaciones, también las ordinarias.
- Suspensión de todas las salidas de permiso, programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.
- Se ordena la ampliación del número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas los internos, especialmente con sus abogados.
- Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y que se encuentren en Centros de Inserción Social (CIS) y





secciones abiertas (no en los centros penitenciarios ordinarios) podrán salir exclusivamente para realizar las actividades relacionadas en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

1.2. Medidas de coordinación:

- Reuniones periódicas del equipo directivo en comunicación directa con los responsables de prevención de riesgos laborales y traslados.
- Puesta en marcha de canales telemáticos de coordinación y comunicación.
- Comunicación permanente con el Servicio de Inspección, a través del Inspector de guardia.

1.3. Otro tipo de medidas:

- Se cancela la autorización de acceso a personal que no sea funcionario o laboral y a todo el personal extrapenitenciario cuya labor no sea imprescindible. Queda excluida por tanto la entrada a voluntarios de ONG, entidades colaboradoras, profesionales acreditados, etc...
- Se suspende la actividad docente.
- Se suspenden los traslados, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales.
- Se cierran los talleres productivos de empresas externas.
- Se permite la permanencia de los internos en celda, primando la voluntariedad.
- Se establecen turnos para desayunos, comidas y cenas, así como la estancia en zonas comunes.
- Se establece la gratuidad de las llamadas telefónicas para aquellos internos que carezcan de recursos.
- Impartición de charlas informativas a los internos por parte de los equipos directivos de los centros penitenciarios.
- Se permite la flexibilización de turnos de trabajo y horarios para evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos de funcionarios a los centros



penitenciarios; se crean equipos de trabajo estancos para evitar el contacto entre ellos.

Sólo para CIS y secciones abiertas:

- Se suspenden las presentaciones voluntarias de libertad, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas.
- Se suspenden los traslados de centros penitenciarios a CIS y los traslados entre CIS. Se mantienen los traslados de CIS a centros penitenciarios.
- Para los CIS que opten por la aplicación del artículo 86.4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (control telemático) a los internos en 3º grado o con régimen de flexibilidad, se establecerá un control telefónico aleatorio mientras el penado permanece en su domicilio a la espera de la instalación del dispositivo telemático.
- Para los casos descritos en el apartado anterior, y puesto que los permisos de salida forman parte de su régimen de vida, se podrán enlazar permisos de salida de manera que permanezcan en su domicilio el mayor tiempo posible.
- El resto de internos residentes en CIS o secciones abiertas, podrán salir a la realización de las actividades previstas en el punto 7 del Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma. Se adoptarán las medidas sanitarias oportunas a su regreso al centro.
- El control de los liberados condicionales pasará a ser telefónico, dando cuenta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Para el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas

- Se propone a los juzgados y Tribunales de la suspensión de los planes de ejecución de las penas y medidas alternativas.

Otras:

- Reparto del material sanitario que se recibe desde el Ministerio de Sanidad.
- Confección de mascarillas en los centros penitenciarios de Córdoba, Madrid I, Sevilla I, Alcalá de Guadaíra y Huelva.
- Instalación de un software libre para la realización de videoconferencias a través de la red SARA.



- Utilización de médicos militares en los centros penitenciarios en los que sea necesario.
- Desinfección de los establecimientos penitenciarios por parte de la UME.
- Se han repartido 305 teléfonos móviles entre los centros penitenciarios, para que los internos puedan hacer videollamadas con sus familiares.

Asimismo, cabe señalar que se siguen en todo momento las indicaciones y recomendaciones de los organismos internacionales en su contextualización aplicable al ámbito, modelo y situación penitenciaria española, en el marco de las competencias que le son propias a este Ministerio y en el respeto y cumplimiento de las que son propias a la Administración de Justicia.

Dentro de las competencias administrativas se realiza un cumplimiento riguroso del marco legal penitenciario. En este sentido, la Administración Penitenciaria no tiene competencia alguna para decidir la entrada en prisión de ninguna persona, siendo esta una competencia exclusivamente judicial. Del mismo modo carece de competencia para decretar la excarcelación de personas privadas preventivamente de libertad.

Por último, cabe señalar que durante este periodo de afectación del COVID-19 se ha aumentado alrededor de un 15% el número de terceros grados y, dentro de estos, un 100% el número de internos e internas a los que se les está aplicando un control telemático.

Madrid, 14 de mayo de 2020